

Régis Debray,

la derecha

y un posible

golpe de estado

Mientras la opinión pública internacional hacía un alto en sus especulaciones sobre la liberación de Régis Debray, el presidente Juan José Torres se reunía, durante, cinco horas, con la plana mayor de las fuerzas armadas (o sea, con muchos de sus enemigos jurados) en una de las más peligrosas gestiones efectuadas por su incipiente y no consolidado régimen.

Desde las tres de la tarde, el regimiento de los Colorados —la guardia presidencial— tomó posiciones alrededor del colegio militar de La Paz con armamento de combate. Poco después llegaba el general Torres acompañado del mayor Hubén Sánchez, jefe de los Colorados y hombre de confianza del presidente. Dentro esperaban a Torres dos de los hombres que, como remanente de la extrema derecha castronense en el equipo que el 7 de octubre tomó el poder en este país, están conmoviendo, cada vez con mayor audacia, la estabilidad del gobierno: el general Luis Reque Terán, comandante del ejército, y el general Hugo Banzer, director del colegio militar de La Paz. Para nadie era un secreto en esta ciudad, enferma de rumores conspirativos, que la derecha militar y algunos sectores civiles, inspirados por el presidente Víctor Paz Estensoro, programan un golpe contra Torres y su línea populista.

En forma inexplicable, por ejemplo, el general Reque Terán se había convertido desde el principio en una especie de portavoz militar. Casi diariamente emitía declaraciones de prensa sobre los más variados temas —sobre todo, la represión antiguerrillera y la liberación de Debray—, mientras que, por el contrario, el general Torres mantenía un no menos inexplicable silencio. Por mero contraste, entonces, Reque Terán ha aparecido siempre como encarnando la opinión de las fuerzas armadas (y aun del gobierno), aunque ahora se ha demostrado que esto podía ser demostrado un «bluff» del locuaz general.

Uno de los hechos contradictorios de esa situación ha sido la conducta oficial relativa a las guerrillas del ejército de liberación nacional en la zona de Teoponte. Mientras el gobierno reitera todas las semanas su propósito de concordia nacional y ha tomado decisiones que abonan este propósito (la amnistía del comandante «Chato» Paredo y sus siete compañeros transportados a Chile, la entrega de cadáveres de guerrilleros a las familias), los mandos militares subordinados a Reque Terán continúan complicando la pacificación.

Fuerzas represivas ocupan aún el Teoponte bajo rigurosas condiciones para la población civil. Ordenes de Torres que permitían el ingreso a la zona de una comisión de la Cruz Roja para rescatar a los hambreados y enfermos supervivientes de la guerrilla fueron desobedecidas por el mando local de esas fuerzas, con la complacencia de Reque Terán. La entrega de los cadáveres sigue dilatándose y el gobierno, a causa de esa conducta de los mandos militares, enfrenta ahora

una acusación más grave no disipada. Desde el 7 de octubre hasta ahora las fuerzas represivas habrían continuado fusilando a guerrilleros que se rindieron en acatamiento a las exhortaciones presidenciales.

La liberación de Debray y sus compañeros de prisión en Camiri ha sido otro de los indicios de esta pugna entre Torres y una extrema derecha militar, que desde su asilo en Buenos Aires manejaría el derrotado general Rogelio Miranda con el discreto auspicio del hombre fuerte argentino, el general Alejandro Lasse.

La versión difundida en Europa y América Latina el domingo 30 sobre una presunta salida de Debray hacia el exterior, se basó en un esquema real y preexistente que Torres y sus hombres de confianza habían elaborado con absoluta reserva para eludir la posible oposición de la derecha castronense. Dentro de ese plan, se comenzó por desplazar a Reque Terán hacia Cochabamba durante el fin de semana, como comprometiéndole en un copioso programa de festejos que duraría desde el sábado 29 al primero de este mes. Con el pretexto de ceremonias en el colegio militar de esa ciudad, el coronel Antonio Arnes, jefe de la fuerza aérea, a quien Torres habría encargado, personalmente, la operación de salida de Debray, viajó el sábado a Santa Cruz, donde lo esperaba el avión DC-3 que transportaría a los prisioneros desde Camiri a un punto exterior del territorio. Complementariamente, el gobierno aisló a Camiri a partir del sábado, cortando sus comunicaciones radiales, telefónicas y telegráficas con el resto del país. El domingo, ese bloqueo se extendió a la propia Santa Cruz, pretextando un corte de corriente eléctrica.

El regreso de Arnes a La Paz, el domingo por la mañana, pareció confirmar que la operación había quedado lista y comenzaba a ponerse en marcha. Desde los medios políticos vinculados al gobierno —donde aparentemente algunos portavoces creían en el éxito del plan—, ese mismo domingo, comenzaron a filtrarse las versiones que enervarían a la opinión pública internacional y que, poco después, deberían ser desmentidas.

La expectativa creada el lunes se hizo aún más dramática al aparecer, mientras se desarrollaba la reunión militar, la edición del diario vespertino «Jornada», con un artículo donde por primera vez se mencionaba públicamente, citando nombres concretos, la presunta conspiración de Reque Terán, Banzer y los golpistas civiles. «La situación política ha evolucionado de tal manera —añadía el articulista—, que la derecha civil y militar están obligadas a dar un golpe de estado en los próximos días».

El diario «Jornada» funciona, oficialmente, como portavoz del gobierno. A las ocho, Torres salió de la reunión y se dirigió al palacio presidencial. Poco después se supo que su arraigada apuesta sobre la lealtad de las fuerzas armadas había tenido éxito, al menos temporal. Prácticamente sin oposición, la asamblea militar había aceptado la liberación de Régis Debray en los términos indicados por el presidente. A partir de entonces, martes día 2, esa liberación puede producirse en cualquier momento; depende, tal como fue decidido por los militares, exclusivamente del propio Torres.

Esto no significa, sin embargo, que el gobierno haya sorteado definitivamente el peligro que le amenaza. «La libertad de Debray —señalan algunos observadores— puede ser simplemente el paso atrás que los conspiradores han juzgado necesario para afianzarse en sus restantes objetivos».

El régimen boliviano parece seguir empeñado en un doble procedimiento

de «limpieza» que, de profundizarse, afectaría de modo intolerable a muchos intereses. Se trata de la ya mencionada investigación sobre el «affaire» de las firmas españolas Camer-Enosa, iniciada bajo el gobierno de Barrientos y continuada en el de Ovando. El asunto (compra a España de material didáctico a precios que triplican los reales con astronómicas comisiones) incluiría también a personajes de este régimen, como Reque Terán. Todos los inculcados —militares y civiles— verían en el derrocamiento de Torres una razonable posibilidad de eludir el escándalo. La otra medida, en la que peligrosamente insiste el gobierno, consiste en el enjuiciamiento y pase a reserva de casi 200 jefes y oficiales implicados en el golpe militar de Miranda (medida a la que, en declaraciones hechas a la prensa, se ha opuesto el actual ministro de Defensa, general David Lafuente).

Por estos días, los golpistas están recibiendo desde el exterior notorios estímulos. La semana pasada, en una maniobra típica de presión económica, el gobierno norteamericano volcó en el mercado sus «stocks» de estaño ocasionando una sensible baja del precio mundial, que pueda resultar ruinoso para Bolivia. Y en Formosa,



al Norte de Argentina, se han realizado maniobras conjuntas de los ejércitos argentino y brasileño, en una zona cuya cercanía con Bolivia da a dichas maniobras un matiz intimidatorio.

Refiriéndose a estas operaciones, el general argentino López Aufranc acaba de hacer más inteligible tal intento de intimidación señalando a la prensa que Argentina y Brasil están creando un «Frente Atlántico», en oposición a un presunto «Frente del Pacífico» que integrarían los inquietantes gobiernos de Chile, Perú y Bolivia.

López Aufranc añadió que se trata de prever la necesidad impostergable de una «función policial» en el cono Sur contra los posibles extremismos. Recordó también, para los familiarizados con la historia latinoamericana, la llamada «guerra de la Triple Alianza», que los ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay libraron a fines del siglo pasado contra otro gobierno considerado díscolo e inquietante: el de Paraguay. Apparently, los argentinos creen que la historia se repite.

La derecha militar, enterada a tiempo, realizó una contrajugada. En Cochabamba, Reque Terán se había eva-

dido el sábado 29, por unas horas, del respetuoso pero firme cerco tendido en su torno por oficiales leales a Torres y había convocado una asamblea de campesinos. Los campesinos —manejados en parte por sindicatos que responden de antiguo a la tendencia del extinto presidente René Barrientos— fueron informados por Reque Terán de que se pretendía poner en libertad a los bandoleros presos en Camiri, a los enemigos de Bolivia. No quedó más remedio que paralizar la operación y postergarla. Horas más tarde, en La Paz, Torres desmentiría la liberación de Debray.

El mentís parece haber sido sólo un expediente para ganar tiempo. Los generales ultramontanos hablan entorpecido nuevamente una decisión del gobierno, pero la virtual insubordinación de Reque Terán en Cochabamba también había descubierto el juego de la derecha. Los altos mandos militares fueron entonces convocados por Torres a la reunión del lunes en el colegio militar de La Paz para un enfrentamiento decisivo.

A esas alturas, los observadores políticos podían afirmar casi con certeza la existencia de dos conspiraciones paralelas contra el presidente:

1) La manajada por Banzer y Reque Terán, un hombre con claras aspiraciones presidenciales, pero también con malos antecedentes cada vez que ha estado en situaciones de poder.

2) La que vienen organizando, en el sector civil, fracciones del «movimiento nacionalista revolucionario» de Víctor Paz Estensoro y, posiblemente, elementos de la «Falange socialista boliviana», también en combinación con ciertos militares desplazados.

Si bien el golpe proyectado por el grupo de Reque Terán no parece haber tenido al principio conexiones con los conspiradores pazestensoristas, no es menos cierto que ambas conspiraciones son miradas con simpatía por el exiliado general Miranda (o sea, por los geopolíticos del ejército argentino y por el departamento de estado norteamericano).

Por ello se afirma aquí que la decisión del presidente Torres en el sentido de enfrentar abiertamente, el pasado lunes, al golpismo militar, se debió a que el gobierno había detectado la unificación de las diversas conspiraciones en un solo movimiento. En La Paz circulaba desde la semana pasada la fecha del presunto golpe «cívico-militar»: el 5 de diciembre o, a más tardar, el 15 del mismo mes.

Con esta situación por delante, el presidente Torres acudió al colegio militar a exigir pronunciamientos definitivos de las fuerzas armadas. Según ha trascendido, el temario de la reunión —a la que asistieron todos los jefes y oficiales con mandos de tropa en Bolivia— consistió en tres puntos principales: 1), el derecho del gobierno (según promesa efectuada por Torres en las minas hace unos días) de armar a los trabajadores en caso de un levantamiento de la derecha; 2), la existencia misma de una conspiración militar en las filas; 3), la liberación de Régis Debray y otros prisioneros.

La expectativa creada el lunes fue aún más dramática al aparecer, mientras se desarrollaba la reunión militar, la edición del vespertino «Jornada» con un artículo en el que se mencionaba públicamente por vez primera, con identificación de nombres, la presunta conspiración de Reque Terán, Banzer y los golpistas civiles. La situación política ha evolucionado de tal manera —añadía el artículo— que la derecha civil y militar está obligada a dar un golpe de estado en los próximos días. ■ CARLOS MARIA GU-TIERREZ.